Imprimir

Exigir cohesión a las Fuerzas Militares hace parte de la relación de obediencia  y respeto que debe existir entre los uniformados y el poder civil representado en el ministro de la Defensa y en el propio presidente de la República, en su rol de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
Al pedir cohesión, el ministro Carlos Holmes Trujillo trata de ejercer su autoridad como jefe de la cartera de Defensa y deja entrever con su petición-exigencia, que efectivamente hay fracturas al interior de las FFMM, en particular, dentro del Ejército nacional.

El asunto es de una gravedad extrema en la medida en que cualquier fisura y lucha intestina dentro de esa institución militar, terminará por afectar la viabilidad institucional, resquebrajar la confianza que gran parte de la sociedad suele depositar en los hombres y mujeres en armas, la legitimidad democrática  y politizará negativamente el funcionamiento y la operación misma de las unidades militares.

Reconozco varios motivos y circunstancias que explicarían las fuertes divisiones que de tiempo atrás se vienen advirtiendo al interior del Ejército y los celos institucionales entre los comandantes de esa fuerza y los de la Armada y la Fuerza Aérea.

El primero de esos motivos está anclado a la dualidad Paz-Guerra. Es decir, hay un grupo de militares en todas las fuerzas que acompaña el Proceso de Paz y la consecuente disminución de las operaciones contra insurgentes. Ello derivó en el goce de cierta tranquilidad operativa en suboficiales, soldados y oficiales. Al disminuir los riesgos de morir o de quedar lisiados por efectos de los combates con las guerrillas, en particular con las entonces Farc-Ep, los miembros del Ejército entraron en una especie “adormecimiento operacional”, visto así por ese otro grupo de uniformados que al parecer “disfruta” de las hostilidades y extrañan las operaciones contraguerrillas.

Durante el tiempo que serví a esta adolorida Patria, a través de mi rol de soldado bachiller (4to del 83), conocí el caso de un capitán de apellido Cárdenas, quien por razones de salud, fue sacado del “monte” y de los operaciones de combate. Decían que la vida tranquila del

Batallón de Servicios Número 2, con sede en Barranquilla, lo “desesperaba”. Era tal su desespero, que cuando fungía como Oficial de Servicio (OS) a cada soldado le pegaba, en la cabeza, con casco de guerra, mientras se hacía la cola para pasar a recibir la comida del rancho. Como este, debe haber cientos de soldados, suboficiales y oficiales a los que el combate, las operaciones de hostigamiento y el salir al “monte”, no solo los hace vibrar y sentirse hombres, verdaderos Machos, sino que los saca de las aburridas rutinas de orden cerrado, propias de los batallones.

A esa condición psíquico-militar se sumaría el manejo discrecional del presupuesto destinado para combatir a las guerrillas, lo que sin duda terminó en prácticas corruptas que vienen desde los orígenes mismos del conflicto armado interno. Cualquier acción vigilante y de control que se pretenda hacer por parte del Gobierno nacional o en su defecto, por organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría, se asumen como una intromisión inaceptable en aquel sector castrense que está a la espera de que el Proceso de Implementación del Acuerdo Final fracase. No son estos los tiempos de regresar al Síndrome de la Procuraduría, dirán aquellos que no apoyan la construcción de una paz estable y duradera.  Se suma a lo anterior, el manejo discrecional dado a las operaciones de inteligencia y a las chuzadas, práctica esta que durante los tiempos de la Seguridad Democrática se naturalizó.

Quien metió a los militares en esa lectura binaria Paz-Guerra fue el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. A lo que su suman los procesos de desinstitucionalización que orientó como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Y lo logró, a través de prácticas y acciones intimidantes, presiones indebidas  y de la entrega de premios, beneficios y reconocimientos, que fueron llevando a la oficialidad hacia estadios de “privatización”, como si se tratara de un Ejército particular y privado, al servicio del latifundista de marras.

El segundo motivo o circunstancia tiene que ver con la extrema politización de la cúpula militar y de los oficiales superiores con mando de tropa, en el sentido en que, acostumbrados a la guerra y al manejo informal dado por Uribe a las relaciones entre el Ejecutivo y las Fuerzas Militares, no se sienten cómodos oficiando como garantes de la vida de aquellos que

hace unos años fueron sus más enconados enemigos: las Farc-Ep. Y mucho menos se sienten cómodos con el actuar vigilante de los periodistas de Semana, cuyos informes periodísticos están soportados en informaciones entregadas por oficiales que no comulgan con el comportamiento poco ético de sus colegas.

Politización que muy seguramente deviene anclada al funcionamiento de Acore y a los intereses de políticos profesionales que fungen como Oficiales de la Reserva. Así las cosas, y por la vía de ese proceso de politización, se ha venido consolidando en el país un Ejército "privado" al servicio de los intereses sectoriales de una Derecha ortodoxa, goda, enemiga de la paz y de la reconciliación.

Y la tercera circunstancia está asociada a los celos institucionales y presupuestales existentes entre el Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional; se incluye en aquellos viejos recelos, a la Policía como institución civil armada. Esas mutuas desconfianzas y tensiones entre los comandantes de dichas fuerzas fueron alimentadas por el rol que cada una de estas instituciones jugaba en la lucha contra las guerrillas, los resultados operacionales y la violación o no de los derechos humanos. Todo esto, en el marco de una cooperación norteamericana, manejada con dobles raceros morales. Huelga recordar en este momento a la Brigada XX, cerrada por presiones de los Estados Unidos por la sistemática violación de los derechos humanos.

Así entonces, la petición o exigencia de Trujillo a los comandantes militares corre el riesgo de ahondar en las luchas intestinas y en los enfrentamientos entre los bandos que al parecer operan dentro de las unidades castrenses. Se suma a lo anterior, la desconfianza que genera el ministro de la Defensa en aquellos oficiales del Ejército que están comprometidos con la paz. Los mismos que están disfrutando de una relativa pacificación.

Definitivamente el regreso del uribismo a la Casa de Nariño le hace daño a la institucionalidad derivada del funcionamiento de las FFMM. Por supuesto que nada pasará. Llamaron ya a calificar servicios a unos cuantos oficiales. Ese es el proceder ético[1] de los uribistas.

---

[1] Véase:
https://www.sur.org.co/duque-y-el-regreso-de-un-ethos-pernicioso-insano-y-mafioso/

Foto tomada de: Elespectador.com